

Prensa Obrera

FOR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
17 de febrero
de 2022

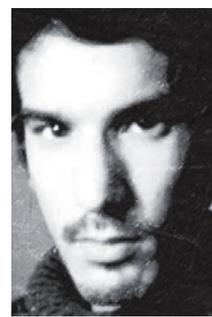
Año XXXVIII
N° 1.638

\$50
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

A organizar la lucha
contra el pacto
y el ajuste



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

TARIFAZO: EL PACTO CON EL FMI EN MARCHA



CON ESTA EDICIÓN

SUPLEMENTO **POLO OBRERO**
POR LA UNIDAD CLASISTA DE OCUPADOS Y DESOCUPADOS



El boletazo del FMI será nacional

No debería ser difícil concluir que la quita de subsidios a las 32 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en el ajuste pactado por el gobierno nacional con el FMI. La reducción del déficit fiscal que forma parte del “entendimiento” con el Fondo se traducirá inevitablemente en tarifazos y boletazos, entre otras cosas. Es que contra lo que se dice, la reducción del déficit que debe lograr el gobierno es significativa. Si se quitan los ingresos extraordinarios del año pasado, el déficit fiscal primario ronda el 4% y debe reducirse al 2,5% -casi un 40%. Además, la fuente de financiamiento de ese déficit sufrirá un ajuste aún mayor, ya que el entendimiento también establece que la asistencia del BCRA al Tesoro debe reducirse del 3,7% actual al 1%. La necesidad de raspar la olla se impone como imperiosa.

En el caso concreto de las 32 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, el monto de subsidios ronda los 13.000 millones de pesos, de los cuales el Estado nacional desembolsó el 55% en 2020 y aproximadamente el 80% en 2021. La administración de Alberto Fernández alega que esos subsidios deberían ser desembolsados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ya que esas líneas circulan solo en territorio porteño, una ciudad que además sería “rica”. Más allá de ese exabrupto se omite deliberadamente que esas líneas de colectivos son usadas también por los 4 millones de bonaerenses que todos los días concurren a trabajar a la Ciudad de Buenos



Aires. Un aumento del boleto impactaría en estos millones de trabajadores y no en los ricachones, que como todo el mundo sabe se moviliza por otros medios.

Hay que advertir, además, que un aumento de estas 32 líneas será solo el anticipo de un incremento generalizado. Es que, por las características del transporte en la Ciudad, donde realizan recorridos similares las líneas que vienen de provincia y las que no, una suba del boleto que afecte solo a las segundas llevará a que las primeras concentren todos los pasajeros. De este modo hay dos alternativas: o estas 32 líneas van a la quiebra o el aumento se generaliza al conjunto del transporte de colectivos. Ajuste del FMI de por medio, es obvio que la alternativa que se efectivizará será la segunda.

Los funcionarios del gobierno

justifican la quita de subsidios invocando argumentos “federales”. No puede ser, dicen, que en el interior se pague un boleto de 60 pesos y en el AMBA de 18. La comparación, claro, es para justificar el aumento en el AMBA y no para reducir el precio del boleto en el interior. Pero, además, omiten que esa reducción de los subsidios en la Ciudad no se usará para bajar el boleto en el interior, sino que será destinado a cumplir las metas con el FMI para el pago de la deuda. Correntinos, tucumanos, porteños y bonaerenses no tienen intereses opuestos sino un enemigo común: el FMI y los gobiernos que pactan con él.

Un punto para destacar es que en el debate nadie cuestiona los subsidios que reciben las empresas de transporte, tanto en la zona metropolitana como

en el interior del país. Los costos que éstas declaran no solo están inflados para justificar los subsidios, parte de los cuales vuelven a los funcionarios bajo la forma de coimas y retornos. Junto con ello los costos están determinados por la gestión capitalista de la economía. Un ejemplo es lo que sucede con el combustible, que se mueve al compás de los precios internacionales y no de los costos locales en pesos. Otro tanto sucede con los neumáticos, cuyo precio permiten a las empresas embolsarse beneficios extraordinarios. Ante esto, una medida elemental sería la apertura de los libros de las empresas para verificar exactamente sus costos y ver sus beneficios. Que son significativos lo prueba el proceso de concentración que se ha ido ejecutando en el último período, quedando en manos de

pocas empresas la inmensa mayoría de las líneas.

Cuando los funcionarios del gobierno nacional dicen que la quita de subsidios no debería llevar a un aumento del boleto, porque el gobierno de Larreta podría hacerse cargo de los subsidios, simplemente eluden su propia responsabilidad. Si el PRO y Larreta son la derecha, y lo son, pasarle los colectivos es para que hagan lo único que saben hacer. El “Macri hacete cargo” para justificar en el pasado la transferencia del subte terminó en que Macri se hizo cargo y aumentó un 125% la tarifa del subterráneo.

Mientras los gobiernos quieren avanzar en los tarifazos, y solo se pelean por ver quién paga el costo político de aplicarlo, los choferes de colectivos sufren una gran flexibilidad laboral por parte de las empresas. Esta presión capitalista, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, ha convertido a la UTA en una olla a presión a punto de explotar, como se pone de manifiesto en paros desde abajo en distintos puntos del país y también en la zona metropolitana.

Llamamos a rechazar el boletazo que preparan los Fernández, Larreta y el FMI, y le oponemos un programa de reorganización integral del transporte público, que comience con la apertura de los libros, un plan de inversiones en colectivos, ferrocarril y subte, y la satisfacción de los reclamos de los trabajadores del sector.

Gabriel Solano

En el primer mes del año, el alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 6,3% respecto a diciembre y un 54,5% interanual, 3,6% por encima de la inflación. En promedio alcanza los 34.000 pesos y hay que sumarle expensas equivalentes al 19% del alquiler. Por su parte, el salario mínimo -con el aumento de febrero- llegará a 33.000 pesos.

Al tener hijos se necesita dos ambientes, que tuvo un aumento mayor, 56%, llegando a los 46.890 pesos (55.800 con expensas). Así, a dos cónyuges que cobran el salario mínimo les quedarán 10.200 pesos para pagar servicios, alimentos, viáticos, vestimenta, etc.

Al mismo tiempo, hay la escalofriante cifra de 120.000 departamentos desocupados solo en la Ciudad (*Clarín*, 10/2).

Este verdadero drama que empuja a los trabajadores a los inquilinatos, a las villas y a los asenta-

mientos es usado cínicamente por el gobierno y la oposición para dar marcha atrás con los pequeños paliativos de la ley sancionada en 2019, que naturalmente no resolvieron el tema de los alquileres y mucho menos el de la vivienda.

Desde la aplicación de la ley, muchos propietarios retiraron las viviendas del mercado, un verdadero boicót que generó un aumento sideral de los nuevos contratos, mientras por otro lado los valores de la propiedad se desmoronaban.

En oportunidad de tratarse el tema en Diputados, Romina Del Plá describió la situación insostenible de millones de inquilinos, que incluye a sectores medios, que

terminan expulsados de las grandes ciudades ante la imposibilidad de pagar los alquileres y mucho menos de adquirir una vivienda. Meses antes de la toma de Guernica denunció las condiciones en las que los trabajadores se ven forzados a ocupar tierras y caracterizó como “aspirinas” la intención de regular la especulación inmobiliaria que llega hasta los alquileres de las villas.

Romina planteó que la actualización de contratos debía estar íntegramente ligada exclusivamente al incremento salarial y tener un tope porcentual del ingreso familiar porque “con salarios ya por debajo de la línea de pobreza ¿cómo

se hace para decidir entre pagar el alquiler o alimentar a la familia?”. Y concluyó: “Acá hay que tomar medidas de fondo que no se podrán tomar mientras siga imperando el lucro capitalista como criterio de organización social; necesitamos un plan de viviendas populares en forma urgente, para terminar con parte del desempleo y con esta miseria y retroceso social. La satisfacción del acceso a la vivienda será parte de un plan de reorganización integral de la economía y en ese tránsito seguiremos defendiendo el derecho de los inquilinos y el derecho de aquellas familias que han comprado una vivienda con los créditos UVA y que hoy están

sometidas a un saqueo sistemático en favor de los bancos” (actas taquigráficas), convocando a profundizar la organización de inquilinos, deudores de los créditos UVA y todos aquellos que luchan por su derecho a la vivienda.

El Partido Obrero en el FIT-U plantea como medidas inmediatas: suspensión de los desalojos por dos años como mínimo. Apertura de los libros de las empresas que viven de la especulación inmobiliaria. Impuestos progresivos a las viviendas de alta gama. Impuesto a la vivienda ociosa. Condonación de las deudas hipotecarias confiscatorias y eliminación de la indexación por UVA. Que el alquiler no exceda el 20% del ingreso familiar, al igual que las cuotas de los créditos hipotecarios. Plan de un millón de viviendas financiado por un impuesto a la especulación inmobiliaria.

Fernando Olub

Alquileres: el fracaso de un régimen social



A organizar la lucha contra el pacto y el ajuste

EDUARDO SALAS

La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entró en la recta final. Hay una fecha tope: el 22 de marzo, en que hay un vencimiento de 3.200 millones dólares del préstamo tomado por Macri.

Pero no hay recursos para hacerle frente a ese vencimiento ni tampoco al del Club de París, ni a los de los organismos financieros internacionales, que se concentran entre febrero y marzo. El Banco Central está quebrado. Las reservas líquidas se han agotado. El gobierno espera que la liquidación de la cosecha le aporte los dólares para hacer frente y renegociar algunos de esos compromisos, lo cual no sería factible sin el acuerdo firmado. El superávit de la balanza comercial (por el aumento de los precios de la soja y el trigo, y por la reducción de las importaciones) desaparecerá por los pagos de la deuda y la fuga de capitales, como sucedió con los 14 mil millones de dólares de superávit de 2021.

A pesar de su carácter leonino, de que no se tomó ninguno de los reclamos del gobierno de los Fernández (Estados Unidos acaba de rechazar la eliminación de las sobretasas que constituyen lisa y llanamente usura), la firma del acuerdo no parece correr peligro. Sería anunciado por Alberto Fernández el 1° de marzo en la inauguración de las sesiones legislativas y, contrarreloj, debe ser aprobado por ambas cámaras antes del 22. En estos días, la atención está concentrada en qué harán los bloques en el Congreso.

Una crisis política que se agrava

Todo el arco patronal ha reclamado que se apruebe. El embajador norteamericano, Marc Stanley, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta para garantizar el apoyo de la derecha, que Juntos por el Cambio ya había confirmado, aunque dice esperar a ver la letra chica.

El problema central parece estar colocado en el bloque oficialista. Las declaraciones del presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, de que quiere ver la letra chica primero, sonó como un mensaje de CFK de que no apoyaría el acuerdo; sin embargo, parece ser una movida para que la cámara de ingreso del proyecto de ratificación del acuerdo sea Diputados y no Senadores.

En Diputados, en los últimos días, el renunciante Máximo Kirchner reunió a su tropa y le dijo que no "hicieran olas", anticipando una abstención (mucho menos el voto en contra), que hay una negociación abierta con el gobierno para ver cómo se distribuye el ajuste.



Federico Imas Ojo Obrero

Todo indicaría que, chisporroteos mediante, el acuerdo va a ser aprobado por el Congreso. De todas maneras, los tiempos son cortos y agudizan las maniobras.

Sin embargo, no debe menospreciarse la crisis que ha desatado el acuerdo anunciado por Fernández. Las resistencias de quienes están de acuerdo en la necesidad de firmarlo parten de las evidencias de que se trata de un "salvavidas" de plomo y tratan de no quedar pegados a las consecuencias del mismo.

En la reciente reunión de las empresas yanquis en la Argentina con el embajador de ese país, luego de apoyar la negociación con el FMI, se quejaron por el cepo. La sequía de dólares no se va a resolver pateando los vencimientos (a un costo enorme), que es lo que se terminó acordando; no está planteada la entrada de capitales, en gran parte por la crisis internacional y sobre todo la de Estados Unidos con la suba de la tasa de interés en ese país.

La industria se queja por el cepo porque no puede comprar insumos en el exterior lo que paraliza la producción, pero también se ve afectada por el alza de la tasa de interés y la eliminación (o recorte) de los subsidios, que son parte de la letra no tan chica.

La pretensión de la oposición de que no se aumenten los impuestos (a los capitalistas, porque a los trabajadores sí se los aumentan) choca con la necesidad de achicar el déficit fiscal, que es una parte sustancial del reclamo del Fondo.

Con este resumido rosario de quejas

de los grupos capitalistas se puede caracterizar que la aprobación del acuerdo por parte del Congreso no implicará un fortalecimiento del gobierno, ni del albertismo y el massimo (los que más cinchan por él) dentro de la coalición oficial. Solo se pasará a otra etapa de la crisis en la que los reclamos de cada facción capitalista adquirirán mayor voltaje. En concreto, la crisis política puede pegar un salto.

Contra el acuerdo, contra el ajuste

La multitudinaria movilización piquetera de este martes 15 (precedida por las multitudinarias marchas del 11 de diciembre y el 8 de febrero pasados) frente al anuncio -entre otras cuestiones, de que se congelarán los planes sociales- anticipa que la aplicación de los acuerdos y de la "letra chica" provoca la más temida de las reacciones: la intervención de los trabajadores. No es para menos, el ajuste que impone acordar el pago de la deuda ha sublevado a media América Latina en los últimos tres años.

Para los trabajadores la "letra chica" ya está en marcha. Los anuncios de los aumentos del transporte, del combustible y de los servicios esenciales (luz, gas, agua, telefonía, salud) terminan echando nafta a la inflación que en enero alcanzó el 3,9% (con un 4,9% para los alimentos), cuando aún el efecto de los tarifazos no se hizo sentir.

Las políticas adoptadas por el gobierno en combinación con el FMI (quita de subsidios, devaluación) son un acicate para el

aumento del costo de vida, que los índices reflejan parcialmente. La inflación es el ajuste vía la depredación de los ingresos de los trabajadores. Y esto es deliberado, como lo confirma la pretensión del gobierno de un techo del 40% a los aumentos salariales, cuando ningún pronóstico de inflación para el año baja del 55%.

La reducción del déficit fiscal en un 40% que impone el acuerdo con el Fondo planteará además un ataque directo. Esto es lo que está planteado con los planes sociales, pero sucederá con los trabajadores del Estado y con las jubilaciones.

Las peleas dentro del oficialismo o con la oposición esconden que todos están aplicando el ajuste y que quieren ir por más.

En ello reside la importancia de redoblar la organización contra el acuerdo y contra el ajuste en curso, que son parte de un mismo paquete.

Impulsemos una gran campaña con la deliberación más amplia de los trabajadores para ir por la defensa del salario y las jubilaciones, de los puestos de trabajo, de la asistencia social. Para rechazar el saqueo y la entrega de los recursos naturales. Para repudiar el pago de la deuda usuraria y exigir la nacionalización de la banca, de la energía y del comercio exterior.

La campaña, con la agitación y la movilización, va preparando las condiciones para que al momento en que las consecuencias directas del pacto se hagan sentir con toda su magnitud se establezca una salida de los trabajadores.

La lucha contra el ataque fascista en Córdoba

El martes 8 de febrero, en el marco de la jornada nacional contra el acuerdo con el FMI, se realizó en Córdoba una movilización popular masiva, inédita para tiempos de receso. Nunca a comienzos de febrero tuvimos una convocatoria tan grande. Se movilizaron cerca de 20 mil personas. La marcha contra el acuerdo con el FMI fue la expresión de la grave crisis social que ya se vive en la provincia y en el país, que es fruto de las políticas aplicadas por los gobiernos.

En este marco, cuando ya finalizaba la jornada, se desarrolló un ataque fascista, donde grupos de hombres armados y con el rostro cubierto exhibieron armas y amedrentaron a manifestantes en varios lugares en forma simultánea, lo que provocó una estampida y tumultos. Mientras esto se producía, fue agredida una compañera del Polo Obrero que terminó con una costilla fracturada. La estampida desencadenó en una situación donde hubo varios heridos que requirieron atención médica y hospitalización, entre ellos, dos bebés.

Hasta el momento no se han podido identificar a los grupos que ejecutaron el ataque; puede tratarse de una provocación montada por los aparatos de seguridad o sectores que responden a los gobiernos, o incluso grupos de



derecha fascista; hay que recordar que el grupo de Javier Milei acaba de presentar un proyecto para impedir las movilizaciones callejeras y los piquetes con represión. Pero mientras la investigación se desarrolla, el gobierno de Juan Schiaretti, por medio de su Justicia adicta, pretende garantizar la impunidad.

Rápidamente, el fiscal Raúl Garzón, que es un hombre de Schiaretti, salió a atacar a las organizaciones de lucha, lanzando la hipótesis falsa de que se trató de un enfrentamiento entre manifestantes. De esa forma, la Justicia

del Estado capitalista siembra la impunidad sobre el ataque producido. El propio Garzón tiene una larga trayectoria en perseguir con acusaciones falsas a las luchas obreras y populares, como sucedió con las luchas de UTA y Suoem durante la cuarentena.

La respuesta de las organizaciones de lucha que habíamos movilizado contra el FMI no se hizo esperar. Inmediatamente se emitió un comunicado común y se convocó una conferencia de prensa en Buenos Aires (Obelisco), que luego culminó con una movilización a la Casa de Cór-

doba, con la participación de decenas de organizaciones de izquierda, sociales, sindicales y de derechos humanos. Eduardo Belliboni denunció que “hubo un ataque perfectamente coordinado en una movilización enorme, una de las más grandes de Córdoba en los últimos tiempos, que, como se vio aquí y en todo el país, es una marcha contra el pago de la deuda y contra el ajuste que eso significa”.

El viernes pasado, Soledad Díaz, Cintia Frencia (concejala del FIT) y demás dirigentes del Partido Obrero realizamos la de-

nuncia penal para que se investigue y condene a los responsables, asimismo se exigió el apartamiento de la causa del fiscal Garzón, por haber atacado con acusaciones falsas a las víctimas y por haber adelantado opinión.

Posteriormente, el lunes pasado, las tres organizaciones que sufrieron los ataques (Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie) juntamente con las fuerzas del FIT-U y otras organizaciones de lucha convocamos a una concentración y conferencia frente a Tribunales I de Córdoba. Se hicieron presentes para brindar su solidaridad, representantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. En esa conferencia, el compañero Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero cordobés expresó: “El fiscal Garzón se ha convertido en el garante de la impunidad del ataque producido y ha montado las bases para proceder a una provocación mayor contra los luchadores”.

La lucha contra el ataque fascista también se destacó en la enorme movilización de la Unidad Piquetera del martes 15. Esa lucha la integramos a la lucha política contra el pacto con el FMI y las luchas reivindicativas. ¡Abajo el ajuste y la represión!

Jorge Navarro

La masacre por consumo de cocaína envenenada proveniente de Puerta 8 está lejos de terminar. El gobierno buscó cerrar el asunto deportando al “Paisa”, al que presentaron como jefe de la banda. Pero la precariedad en sus condiciones de vida y la insignificante suma de dinero que se le encontró, 30.000 pesos, distan mucho de lo que se espera de un capo narco. De una investigación hermética, de la que poco se sabía, ahora surgió un nombre fuerte, que sí se trataría de un “peso pesado”: Max Alí Alegre. “Alichó” dirige desde la cárcel una banda que controla la venta en el territorio, y se presume que la mitad de la misma está compuesta por policías.

Así se desprende de expedientes judiciales y de llamadas auditadas en la causa, donde los narcos hablaban sin atenuantes de cuánto recaudaban en un día y cuánto le tributaban a la policía. O donde solicitaban a una vendedora que “preparen polvo similar a la cocaína” para plantar en una zona que sabrían que sería allanada.

La mayor parte de los implicados son de la Bonaerense, pero también

La banda de la cocaína adulterada es regenteada por policías

El Estado es el responsable de la masacre de Puerta 8



hay de la Federal. No solo se trata de una cuestión recaudatoria o de cajas negras, sino que incluso los policías provinciales habrían actuado al menos en una ocasión para amedrentar a la “competencia”. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo impudicamente

luego del episodio que “siempre hay algún policía implicado”, individualizando las responsabilidades sobre un aparato represivo descompuesto que es garante estructural del narcotráfico y el delito.

La millonaria red de coimas circulaba, según las fuentes judicia-

les, por al menos tres organismos policiales: Jefatura Departamental, Comando de Patrullas y División contra el Narcotráfico. “El Papa”, otro Bonaerense implicado, llegaba a recaudar hasta 12 millones de pesos semanalmente. Vale recordar que durante el año pasado en un allanamiento a un búnker de la zona se encontraron sobres con efectivo que se titulaban “Com, Dep y Nar”. Es decir, Comando, Departamental y Narcotráfico. Como “no se pudieron establecer pruebas” sobre el circuito del dinero, la causa fue archivada por el Ministerio Público.

Los vínculos de la Bonaerense (como de la Federal) y el aparato represivo con el delito son innegables. Cada una de las 24 muertes de Puerta 8 de las que se tuvo conocimiento así como las posteriores, las que no

entraron en el “contador” oficial, son responsabilidad del Estado: las fuerzas policiales actúan de conjunto con el aparato de la Justicia y con el poder político. Basta con decir que Berni no retiró ni a un alto mando de la fuerza provincial, ni en este caso ni en otros que han tenido lugar, como el tiroteo narco en San Rudecindo el año pasado. Cuando “las papas quemadas” caen los eslabones débiles de la cadena. Se apartan efectivos, se inician sumarios, en la mayoría de los casos queda todo en la nada; pero nunca se toca a comisarios, jueces, fiscales ni funcionarios.

Terminar con el narco, cuyas millonadas son a su vez blanqueadas a través del sistema financiero, demanda desmantelar el aparato represivo del Estado, triplicar el presupuesto en salud y la inversión en atención sanitaria pública de los adictos, que jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y que gobiernen los trabajadores, y no los que por décadas vienen sacando tajada del delito organizado.

Manuel Taba

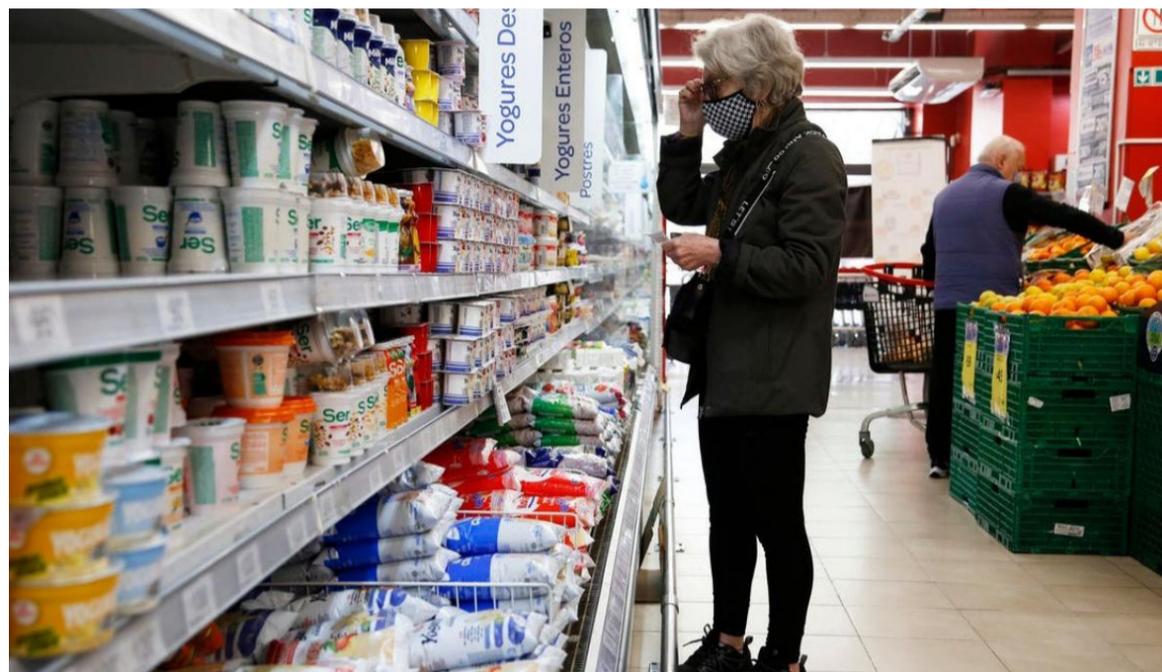
Con un 3,9% en enero, la inflación sigue la ruta del ajuste del FMI

Tarifazos y subas de combustibles y alimentos licuan los ingresos de los trabajadores

Con una suba del 3,9% de inflación para enero, el año 2022 se encamina a otro salto en los precios al calor de una política orientada al pago de la deuda externa. Por esta vía, los salarios y el gasto social pierden lugar ante la inflación, golpeando con fuerza los bolsillos de los trabajadores.

El dato se desprende de la actualización del Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el Indec, que registra los movimientos de precios en enero y un aumento interanual de la inflación del 50,7%. Alimentos y bebidas no alcohólicas treparon al 4,9% de aumento y el ranking mensual es encabezado por Comunicaciones (7,5%), un recurso esencial en tiempos de pandemia.

El dato de la inflación no sorprendió a propios ni ajenos en el gobierno, ya que se corresponde con una política aplicada desde el propio oficialismo, con el desmantelamiento del congelamiento trucho de precios, la vía libre para aumentos y remarcações de "buena fe" de las patronales, la emisión monetaria para financiar los subsidios a las petroleras, distribuidoras energéticas y capitalistas, y las expectativas devaluacionistas y los aumentos previstos en tarifas, en la senda de las negociaciones con el FMI.



Con todo esto, aún resta cuantificar el impacto del aumento en los combustibles (11%), a partir de febrero, y el primer tramo del 20% en gas y electricidad, luego de que se realicen las audiencias públicas convocadas para tal fin.

Ancla contra los salarios

Las estimaciones privadas, incluso la del Banco Central, apuntan a que la inflación del año 2022 se ubicará por arriba del 55% anual, conforme el gobierno "achique" la brecha cambiaria, libere tarifas

e implemente las medidas pactadas con el FMI.

De todas maneras, la pauta oficial para negociar aumentos salariales y actualizaciones fue fijada en un 40%, lo que revela la pretensión de anclar los salarios por debajo de la inflación, impulsando una depresión generalizada del poder adquisitivo de los salarios.

A su vez, sectores como los beneficiarios de los programas y prestaciones sociales volverán a ser actualizados a la baja, luego de

un 2021 donde el salario mínimo cerró en 35% de aumento y donde los funcionarios públicos adelantan que no se prevé ninguna recomposición general de ingresos.

Fracaso tras fracaso

Luego del fiasco del Congelamiento de Precios, el gobierno reeditó Precios Cuidados como una salida "decorosa" a las presiones patronales y con aumentos mensuales y revisiones trimestrales, que, aun así, no inhiben a las patronales de maniobras de todo

tipo para evadirse de los precios listados. Esto, considerando que el programa solo alcanza a una porción ínfima de bienes y a solo al 30% del mercado.

En un año que el gobierno tendrá que bajar drásticamente el déficit fiscal, según las metas del FMI, cabe esperarse que los recortes en el gasto público se sientan con fuerza, por la vía de una licuación de los recursos asignados, que perderán valor contra el dólar y los precios en general, como viene ocurriendo en la actualidad. Por esta razón, decenas de miles de manifestantes salieron las calles este martes 15 para reclamar por trabajo genuino, alimentos y la apertura de los programas sociales contra el desempleo.

La escalada de la inflación es consecuencia de una orientación de gobierno, que se inscribe en el pacto con el FMI y en mayores penurias para los trabajadores. Hay que redoblar la apuesta para derrotar esta tentativa antiobrera, rechazando cualquier acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa, y procediendo a una recomposición general de los salarios, para llevarlos por arriba de la canasta familiar y con actualización mensual según la inflación.

Marcelo Mache

Se profundiza el ajuste en la asistencia social

El acuerdo con el FMI plantea un recorte drástico sobre el gasto social

El gobierno nacional viene declarando su negativa de reabrir los programas sociales, en el marco de las necesidades económicas y sociales crecientes de la población. Esta agenda antiobrera se completa con la licuación de los ingresos de los trabajadores precarizados, por la inflación, y con la falta de alimentos ante una mayor demanda social por el crecimiento de la pobreza.

La política oficial de reducir el gasto público es uno de los reclamos principales del FMI para cumplir con las metas de "ahorro fiscal" y recaudar esos recursos para destinarlos al pago de la usurera y fraudulenta deuda externa, a costa de las dificultades de los trabajadores.

Esto se expresa en la desvalori-

zación de los ingresos percibidos (16.000 pesos) de quienes ya son beneficiarios de un programa social (más de un millón de trabajadores), por vía de actualizaciones de los importes por debajo de la inflación actual y la proyectada.

Con esta política, el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández busca ir desmantelando la precaria asistencia de los programas sociales, los cuales se han incrementado debido a la incapacidad oficial de generar puestos de trabajo y dar respuesta a las necesidades populares planteadas, y a la iniciativa independiente del movimiento piquetero combativo que se ha movilizó para obtener respuestas y soluciones inmediatas.

Un problema de fondo

La masa de programas sociales, con predominancia del Potenciar Trabajo, se ha convertido en un problema político para este gobierno. En 2021 se destinaron 221.838 millones de pesos para el programa Potenciar Trabajo, luego del prematuro desmantelamiento de la asistencia social ante la pandemia (IFE), que alcanzó a casi 9 millones de personas. Y una suma similar para políticas alimentarias.

Estas cifras, tomadas de conjunto, apenas superan la mitad de lo que el gobierno destinó en 2021 para financiar a las distribuidoras y productoras energéticas, monto que ascendió a 695.831 millones de pesos.

La iniciativa oficial consiste en ir

disminuyendo progresivamente los planes sociales, pero no por la vía de la generación de empleo genuino, sino con la precarización extrema de las condiciones de empleo en los municipios y con las bajas producidas por los punteros, para lo cual el gobierno pretende asegurarles garantías excepcionales contra el pase y la protección de las organizaciones independientes.

Lucha piquetera

Las "soluciones alternativas" provenientes del campo social oficialista, en boca del dirigente Juan Graboys y la Utep, se orientan a consagrar un "subsidio universal de hambre", que amplíe la base de beneficiarios sobre la división de los recursos existentes: una socialización de la miseria. En tales circunstancias, no pasa de una cortina de humo para disimular el ajuste sobre la asistencia social.

Contra esta orientación, la Unidad Piquetera protagonizó una inmensa jornada de lucha nacional, el pasado martes 15, con decenas de miles de manifestantes en la ca-

lles de las principales ciudades de todo el país, reclamando por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores y libertad de organización.

El Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones convocan a un plenario para el 11 y 12 de marzo, en el cual deliberarán y resolverán las medidas a tomar, en el marco de un frente único de lucha contra el ajuste.

A seis meses de que la Unidad Piquetera presentó un proyecto de generación de un millón de puestos de trabajo en la obra pública, para la construcción de 100.000 viviendas, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no ha ofrecido ninguna respuesta.

La lucha contra el ajuste sobre la asistencia social no es independiente de la lucha contra el FMI, cuya agenda antiobrera es seguida al pie de la letra por el gobierno del Frente de Todos.

M. M.

El ferrocarril Sarmiento paró en defensa de los protocolos Covid-19

Este miércoles 16 se llevó adelante el paro de 24 horas resuelto por la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria y el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento en reclamo de que Trenes Argentinos sostenga los protocolos Covid-19 aún vigentes.

La representación gremial del Sarmiento denuncia que la empresa ha practicado importantes descuentos salariales a trabajadores que han tomado licencia en carácter de contacto estrecho.

El masivo cumplimiento de la medida paralizó el servicio y solo corrieron unos pocos trenes a cargo de personal jerárquico.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, amenazó con aplicar sanciones, lo cual representa un desconocimiento del derecho de huelga de los ferroviarios por parte del gobierno que gusta llamarse "nacional y popular".

La conducción nacional de la Unión Ferroviaria no ha respaldado

la medida en defensa de la salud de los trabajadores, así como tampoco se interesa por el hacinamiento que sufren los cientos de miles de usuarios que viajan cotidianamente bajo la pandemia.

El propio Sergio Sasia emitió una circular en la cual dejó sin efecto la recomendación al personal, sobre formaciones, de despachar los trenes desde cabinas de conducción en los horarios pico para preservar de contagios.

La agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra-Lista Gris se pronunció en apoyo a la acción de lucha resuelta por los ferroviarios del Sarmiento, repudió la complicidad de la burocracia pedracista de Sergio Sasia con Trenes Argentinos y llamó a los ferroviarios a autoconvocarse en reuniones de sector para exigir el cumplimiento de todas las normas de prevención y resguardo frente a la pandemia.

Corresponsal



El lugar del Sutna en el movimiento obrero

El otorgamiento de la primera cuota de un bono de participación en las ganancias de Bridgestone de 365.000 pesos por trabajador, que se duplicará en la segunda cuota, colocó al Sutna en la primera plana de las noticias sindicales, en los principales medios de comunicación, y fue motivo de debate hasta en el último rincón de cualquier sección de trabajo en los más diversos gremios y, desde luego, en el activismo combativo. El premio significa unos 1.000 millones de pesos de erogación para la multinacional japonesa.

No es para menos. Sin embargo, en Luz y Fuerza, los trabajadores percibirán un premio de unos 600 mil -ya descontado el impuesto al salario- que costará a Edenor y Edusur unos 44.000 millones de pesos y fue una noticia muy menor. Se trata de una conquista firmada en el año 1965 y que subsiste a pesar de todos los retrocesos impuestos a los trabajadores del sector.

Es que el premio de Bridgestone es la punta de un iceberg de luchas y conquistas obreras del Sutna desde su recuperación por el clasismo en abril de 2016. Firmado por Pedro Wasiejko, hoy presidente patronal del Astillero Río Santiago, esta participación en las ganancias siguió la línea de Menem en los '90. Fue establecida como "compensación" para una gran entrega: "fue para hacer pasar la rebaja del 40% del salario en 2001", señala Alejandro Crespo, el secretario general del Sutna recuperado por los trabajadores. Pero en 15 años se cobró dos veces.

Fue la recuperación de la seccional Llavallol y la ofensiva reivindicativa en fábrica en base a asambleas y organización de los compañeros desde octubre pasado la que obligó a la patronal a reconocer lo firmado. Esto tuvo muchos antecedentes, entre ellos el paro general por el despido de un compañero, entre otras medidas de lucha, impulsadas por el Sutna central, aun cuando la seccional estaba en manos de la burocracia.

En realidad, esta conquista hizo trascender al conjunto de la clase obrera todo lo que significa el Sutna. Que la paritaria del Neumático 2020/21 fue del 55,2%, por encima de la inflación del período, y que la del 21/22 le viene ganando por goleada a los precios al llegar a la revisión de marzo. En un período de altas ganancias de las patronales del sector, el Sutna impulsó con movilización y lucha una recuperación histórica del salario en tiempos de pérdida en la mayoría del movimiento obrero.

Alejandro Crespo señala a *Prensa Obrera* que en la propia Bridgestone "activamos premios sectoriales, recategorizamos a decenas de trabajadores, terminamos con 250 contratos basura pasados a planta permanente que ahora también serán beneficiados por este bono". Pero, agregamos nosotros, que en tiempos de declaración de pérdidas en un Preventivo de Crisis en Fate, el sindicato lo rechazó de plano con movilizaciones obreras y de toda la comunidad trabajadora de San Fernando, en unidad con el Polo



Obrero, que impusieron una salida sin ningún despido a la patronal y al gobierno macrista, nada menos. Se impusieron estándares de producción donde reinaba el arbitrio patronal, se puso base a premios que no las tenían. Y durante el Covid, se paró durante semanas al ser declarado esencial el Neumático hasta que se garantizaron los protocolos bajo control obrero del sindicato y sus delegados.

El Sutna lucha para que ningún trabajador de sus plantas game menos que una verdadera canasta familiar, de ahí para arriba de acuerdo con la categoría, antigüedad, etc. Un objetivo estratégico que tiene valor universal para todo el

movimiento obrero y que empieza a ser realidad en el Sutna, con diferencias entre las plantas. Los obreros no tienen control ni acceso a las cuentas patronales, a sus libros, por eso se lucha por el salario de convenio y por las conquistas obreras que lo refuerzan. Crespo ha explicado que las cubiertas se venden a precio dólar internacional, pero los salarios en dólares están muy lejos de los valores en los países desarrollados. Se entiende por qué los compañeros ganaron con el 75% de los votos, contra la burocracia sindical y a pesar de la izquierda divisionista.

Esta breve síntesis muestra parte del gran iceberg que emergió en

estos días, el de un sindicato que se yergue en grandes fábricas industriales mostrando un rumbo a toda la clase y en especial a sus sectores combativos. En la última reunión de la Mesa Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, Alejandro reflejó el impacto del pacto con el FMI en las plantas y la crisis política desatada, marcando el crecimiento de la autoridad de quienes lo venimos denunciando.

Cuando los ferroviarios del Sarmiento van al paro por sus protocolos de salud, cuando el clasismo del subte reclama recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, avalada por el clasismo kirchnerista, cuando la docencia combativa exige un básico acorde al costo de vida, cuando Cicop reclama en el mismo sentido, cuando la lista Roja de izquierdas obtuvo el 42% en uno de los sindicatos de la Carne, cuando Camioneros denuncia el retiro de las ART de la cobertura Covid, el Sutna marca un camino basado en la asamblea de fábrica y de gremio, en la organización y la lucha, en la independencia de clase que aporta a todo el clasismo nucleado en el Plenario del Sindicalismo Combativo del que el Sutna es fundador junto a sindicatos y cuerpos de delegados recuperados y a los movimientos de desocupados del clasismo.

El contraste entre esta realidad y el apoyo de la CGT al acuerdo con el FMI ha llegado a uno de los puntos más altos en mucho tiempo. El Sutna marca el camino.

Néstor Pitrola



Elecciones en la Carne: gran votación para la Lista Roja

El 42% obtenido y su triunfo en seis de los diez frigoríficos no le alcanzaron para recuperar el sindicato

El 14 de febrero se realizaron las elecciones de la seccional Capital del Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes, en las que votó el 62% de los afiliados. La burocracia de la Azul y Blanca obtuvo 1.129 votos (58%), contra la Lista Roja que obtuvo 807 (42%).

La Roja ganó en los frigoríficos Rioplatense, Bancalari, CPC, Frigolomas, Visom y en el emblemático Penta, que protagonizó una enorme lucha en 2020 contra 240 despidos. Pero el triunfo de la Roja en seis frigoríficos no alcanzó para ganar la elección. Sucede que en las plantas más grandes del gremio, con la excepción del Rioplatense donde la Roja ganó con el 76% de los votos, se impuso muy holgadamente la Azul y Blanca. Es lo que sucedió en Ciaber, Catter Meat, Federal y Ecocarnes (Cocarsa). En este último frigorífico fueron excluidos del padrón

los trabajadores de la tercerizada Indumeat, simpatizantes de la lista clasista. A su vez, en Ecocarnes, la burocracia contó con la colaboración de un delegado del Nuevo MAS, que rechazó integrar la Lista Roja y actuó deliberadamente en contra de ella hacia el final de la campaña.

La Roja -liderada por Carlos Zerrizuela (militante de Opinión Socialista) e integrada por numerosos luchadores antiburocráticos independientes- se presentó como una lista independiente de las distintas alas de la burocracia sindical de la carne y de las patronales, y reivindicó que las principales decisiones del gremio sean tomadas a través de las asambleas de planta y de la Junta de delegados. En el curso de la propia campaña, la Roja denunció la revisión paritaria firmada por la burocracia y planteó la lucha por un aumento del sala-

rio real junto a todo un pliego de reivindicaciones de los trabajadores de la carne.

Se apoyó para desenvolver su campaña en los sindicatos combativos, particularmente en el Suteba Tigre y en el Sutna, y en los partidos de izquierda. El PO apoyó con todo a la Lista Roja.

La gran elección de la Roja es un importante punto de apoyo para seguir desenvolviendo un movimiento clasista al interior del gremio. Será de enorme importancia que las comisiones internas combativas de la carne se organicen para coordinar la lucha antipatronal en el gremio y que se integren al Plenario Sindical Combativo, que agrupa a los sindicatos y comisiones internas recuperadas como polo de referencia contra el conjunto de la burocracia sindical.

Pablo Giachello

Por la autonomía de Ctera del gobierno que pacta con el FMI

19 y 20 de febrero, XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente

El XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente sesionará en un momento dominado por el abierto cogobierno de la administración peronista con el FMI, luego del pacto de sumisión con el organismo imperialista, y que plantea más ajuste contra los trabajadores de los Fernández y todos los gobernadores. En cuestión de semanas, el Congreso Nacional será el escenario de la votación de legisladores del Frente de Todos y de la oposición de Juntos para ratificar el pacto.

Esta coincidencia es el reflejo político de la concertación entre el gobierno, las cámaras patronales y toda la burocracia sindical, que viene sosteniendo el derrumbe de los salarios y las jubilaciones a niveles de pobreza y/o indigencia, y el derrumbe de la educación, la salud y el conjunto de las necesidades populares.

Un pacto incompatible con las reivindicaciones obreras

Toda la burocracia sindical apoyó el pacto con el FMI, y en primerísimo lugar la dirección de Ctera y de la CTA de los Trabajadores, con Hugo Yasky a la cabeza. Con ese apoyo se comprometieron a defender más ajuste en educación, necesario para que el gobierno reduzca el gasto público y haga caja para pagar al FMI.

¡Mienten cuando proclaman que van a defender los intereses de los educadores y de la educación y al mismo tiempo el pacto antiobrero con el FMI!

Hoy, sin las exigencias del FMI aún firmadas, los salarios son de pobreza, desde el inicial hasta los sueldos con máxima antigüedad de un maestro de grado y con más del 40% del total de los docentes del país que cobran 41 mil pesos. Hoy,



las escuelas se derrumban y no hay condiciones para una presencialidad plena. ¿Cómo será cuando se implemente el pacto?

Sin consultarle a nadie y sin conseguir nada de lo que prometen, ya declararon su alineamiento con las medidas del Consejo

Federal de Educación y anunciaron que las clases comenzarán sin inconvenientes.

Recuperar Ctera para los trabajadores

En contraste, el XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente se reunirá los días 19 y 20 de febrero para discutir un plan de acción para enfrentar el ajuste, las paritarias a la baja, los salarios y las jubilaciones de pobreza, así como la defensa de la escuela pública frente a la privatización educativa en curso, impulsando el frente único de los sindicatos, seccionales y agrupaciones de la Multicolor y de los sectores antiburocráticos de todo el país.

Apoyándonos en los avances arrancados por la docencia en las elecciones de Aten-Neuquén, donde se recuperaron seccionales de manos de la burocracia celes-

te (como Capital y Plottier), o en la importante votación de Agmer de parte de la flamante lista Multicolor provincial de Entre Ríos y la gran elección de la también flamante Multi de Madryn (Chubut), el congreso también abordará las próximas elecciones en diferentes provincias, como en Suteba -una lucha clave-, la ADP de Salta o Amsafe, entre otras, poniendo en pie listas únicas antiburocráticas que permitan desplazar a la burocracia celeste de nuestros sindicatos.

¡La independencia de nuestros sindicatos del gobierno nacional y de todos los gobiernos provinciales es imprescindible para enfrentar el ajuste que viene de la mano del acuerdo con el FMI!

Del Congreso de Tribuna, cuya apertura estará a cargo de Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza, participarán cente-

nares de docentes de 18 provincias y se realizará combinando la forma presencial en la Ciudad de Buenos Aires, con presencia masiva de compañeros de UTE y de Ademys, y de 34 distritos de la provincia de Buenos Aires, con los secretarios generales y dirigentes de Ademys y de los Suteba Multicolores, y delegaciones de todo el país, dirigentes de la minoría de Agmer, de la directiva de Aten Capital y Plottier, de Amsafe Rosario, entre otros, y en forma virtual, para la más amplia intervención de las/os compañeras/os de todo el país.

¡Por una nueva dirección en Ctera y para fortalecer la deliberación y la lucha de toda la docencia contra el ajuste, inscribite para participar del XIV Congreso Nacional de Tribuna Docente!

Daniel Sierra

Prensa Obrera.com | POR UN PARTIDO OBRERO

Conadu Histórica: elecciones del 30 de marzo al 6 abril

Se presentó la lista Multicolor

La Multicolor representa a compañeras y compañeros de 21 universidades, de quienes dirigimos asociaciones de base, de delegados/as y activistas de universidades de todas las regiones del país. En la elección anterior, la Multicolor obtuvo el 33% y es la minoría en la Mesa Ejecutiva de la Conadu Histórica con dos secretarías.

La Agrupación Naranja encabeza la lista Multicolor, siendo la vertebradora de este gran frente único. Antonio Rosselló (actual secretario de Organización de Conaduh) es el candidato a secretario general, y destacamos las candidaturas de nuestra compañera Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA), de Patricio Grande (secretario ad-

junto de Adunlu) y Juan Cappa (directivo de Aduns).

La Multicolor lucha por la autonomía de la Conaduh, y de sus 27 asociaciones de base, de todos los gobiernos y todas las gestiones universitarias. Somos consecuentes opositores a los pactos coloniales con el FMI que suscribieran ayer Macri y hoy el Frente de Todos.

La actual conducción, integrada por el PCR y el deggenarismo, se ha ido alejando de las banderas históricas de nuestra federación, de su carácter democrático, combativo y de independencia política. Necesitamos recuperar la Conadu Histórica para defender las conquistas docentes y una universidad al servicio de la mayoría

nacional y no de los negocios de los monopolios.

El gobierno profundizará el ajuste contra los trabajadores. En el caso de la universidad y la ciencia, aplica recortes: en las jubilaciones de científicos y docentes universitarios con las reformas jubilatorias de Macri (2017) y Alberto (2019), la abrupta caída del salario, la falta de inversión en infraestructura, y la nula en equipamiento y conectividad para docentes y estudiantes en tiempos de pandemia, la virtualización forzosa y el presupuesto de ajuste 2022, que fue acordado entre el gobierno y los rectores a espaldas de toda la docencia.

Desde la Multicolor nos opusimos a todos los acuerdos paritarios



a la baja, al incumpliendo de la cláusula gatillo en febrero 2020 y luchamos contra la precariedad laboral, donde más de 20 mil docentes trabajan gratis y más de 50 mil no han podido alcanzar la estabilidad.

Las burocracias sindicales de las universidades nacionales (con la Conadu, Fedun y Ctera a la cabeza) han firmado sin chistar todos los acuerdos con Macri, Alberto y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que llevaron al derrumbe de nuestros salarios, debajo de la línea de pobreza.

Llamamos a todas y todos a sumarse a la Multicolor, para recuperar la Conaduh sobre la base de la unidad de acción y la independencia política, para derrotar el ajuste y lograr la inmediata aplicación del CCT (convenio colectivo de trabajo), la regularización de los interinatos, el fin del trabajo gratuito y un salario igual a la media canasta familiar para el cargo testigo.

Antonio Rosselló y Patricio Grande

Del 4 al 6 de abril: elecciones en Adunlu (docentes de la Universidad de Luján)

Se presentó la Lista 4 "Naranja y Roja + Fucsia"

La Naranja y Roja + Fucsia está integrada por compañerxs con una probada trayectoria en la lucha por la defensa de la docencia y la universidad pública. En las últimas dos elecciones (2016 y 2018), la Naranja y Roja alcanzó el 47 y 43% de los votos y es la minoría en la Comisión Directiva con tres secretarías.

La lista está encabezada por Patricio Grande como candidato a secretario general y la integran además Gladys Perri, Leonardo Varela, Javier Palma y Natalia Fiori, por la agrupación Naranja.

Este frente único es impulsor de la realización de las asambleas; viene desarrollando un gran trabajo para lograr la plena aplicación del CCT (convenio colectivo de trabajo) y de los protocolos sanitarios; el impulso de planes de lucha en defensa del salario y las condiciones laborales; la independencia sindical de todos los gobiernos y gestiones universitarias; el combate a la violencia de género; la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades; el saneamiento y la transparencia en las finanzas del sindicato; en defensa de nuestra obra social Dasmi; y las luchas por la defensa del patrimonio de la Unlu, tanto contra la municipalidad de San Fernando (Frente de Todos) como en el Campo Experimental de Luján contra la burocracia de Fatun y Fedun.

La actual mayoría en la Comisión Directiva de Adunlu -Patria Grande y otros sectores



del Frente de Todos- está condicionada por su integración al gobierno nacional, provincial y municipal, y al oficialismo de la Conaduh (que firmó en diciembre pasado la estafa del bono de 2.500 pesos). En relación con el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda, Patria Grande se opuso a la movilización del 8F. Como contracara, la Multicolor de la Conaduh sacó un pronunciamiento contra el acuerdo y llamó a movilizar en todas las principales plazas del país.

Por esto, más que nunca, necesitamos fortalecer nuestro sindicato conquistando una nueva dirección de Adunlu. Convocamos a todxs los docentes de la Unlu a sumarse a la Naranja y Roja + Fucsia.

Patricio Grande

No docentes: presentación de lista clasista y antiburocrática en Apuba

El 10 de febrero presentamos lista con el Frente de Recuperación Gremial para las elecciones convocadas por la Directiva de Apuba del 7 de abril. Pese a que todavía no se ha recuperado la presencialidad en la mayoría de los institutos, dificultando las condiciones para garantizar el proceso electoral y la participación, no nos impidió conformar una lista opositora a la actual conducción.

Encabezada por Vanina Biasi, delegada de la Comisión Interna de Sociales de la Agrupación Bordó, la lista reúne a distintas agrupaciones clasistas y compañerxs independientes de distintos institutos de la UBA (Sociales, Hospital de Clínicas, Rectorado, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Arquitectura, Tisioneumonología, Dosuba y el Pellegrini) con la convicción de luchar para recuperar el sindicato para lxs trabajadorxs y jubiladxs no docentes para revertir años y años de conducción burocrática: ausencia de convocatoria a asambleas generales y plenarios de delegadxs, ocho años consecutivos de retroceso salarial frente a la inflación, deterioro de nuestra atención en salud con el vaciamiento de los hospitales universitarios y de Dosuba, falta de inversión en infraestructura y condiciones de trabajo, aumento de la precarización laboral.

Sin tiempo que perder, ahora comienza en cada instituto, hospital, en cada lugar de trabajo, una gran campaña militante en toda la UBA para hablar con cada compañerx para que se sume y apoye al Frente de Recuperación Gremial. Para canalizar la

bronca y malestar contra la burocracia sindical que se viene expresando en otros sindicatos, que dejan pasar el ajuste y las políticas de hambre que van a agravarse con el acuerdo con el FMI. Pese a que aseguraron que habían alcanzado un acuerdo sin ajuste, la realidad no hace más que desmentirlos con el anuncio de tarifazos y aumentos, que golpean el bolsillo de lxs trabajadorxs. Por eso, nuestro eje de campaña será denunciar y enfrentar el acuerdo con el FMI como única vía para alcanzar todas nuestras reivindicaciones frente a la postración de la Directiva de Apuba.

Como mostramos en Sociales, donde hace más de diez años recuperamos la Interna, es posible otra forma de hacer sindicalismo sobre la base de la organización y la lucha decidida en asambleas, con total independencia de las gestiones y gobiernos, como método para defender los derechos de lxs trabajadorxs frente a los atropellos de funcionarios y arrancar nuevas conquistas.

En plena pandemia, también en el Roffo trabajadorxs autoconvocados lograron un enorme triunfo al reincorporar a un compañero despedido injustamente con el silencio cómplice de la Interna alineada a la Directiva, exponiendo el rol de la burocracia y la fuerza de lxs trabajadorxs cuando nos organizamos para frenar los atropellos.

Ese es el camino para recuperar Apuba. ¡Vamos con la Lista 9 del Frente de Recuperación Gremial!

Juan Diez, delegado general Apuba (Facultad de Sociales)

Camioneros movilizó por la “calificación del Covid” como enfermedad laboral

Las centrales obreras deben tomar este reclamo, que es de todo el movimiento obrero

El pasado viernes, miles de trabajadores camioneros se movilizaron al Ministerio de Salud para reclamar que el gobierno extienda el decreto que determinaba la calificación del Covid como enfermedad laboral. El vencimiento del decreto, el día 31 de diciembre de 2021, ha sido un beneficio directo a las poderosas ART, propiedad de bancos y compañías de seguro.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni declaró que “se liberaron las restricciones y se determinó que el lugar laboral no es foco de principal contagio” (Télam), por lo tanto a partir del 2022, los trabajadores con Covid deberán demostrar que lo contrajeron en el ámbito laboral ante una “Comisión Médica”, con las trabas y complicaciones que esto significa para el conjunto de los trabajadores. Absurdo cuando hay miles y miles de contagios diarios, con picos récord durante esta tercera ola y es indemostrable dónde se contagia cada uno. Esta es la impostura de que lo que contagia son “las reuniones sociales” y no el contacto en

ocho o diez horas de laburo.

De este modo, las ART se liberan de cubrir los salarios y los gastos médicos, e incluso indemnizaciones por fallecimiento, de todos aquellos trabajadores que contraigan el virus. Todo el costo médico, nada menor, se traslada a las obras sociales. Por otra parte, las patronales presionarán para desconocer los tiempos de aislamiento de trabajadores enfermos, y se producen descuentos patronales seguramente por casos de prolongación de la enfermedad, que suele llevar muchos días, y ni hablar de los contactos estrechos que, por decreto oficial, los trabajadores tienen que ir a trabajar aunque contagien. Esto es lo que denuncia Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, razón por la cual decidieron movilizarse.

Moyano, que viene de un apoyo cerrado al pacto ajustador y antiobrero entre los Fernández y el FMI como parte de la conducción cegetista, en su rol de triunviro de la CGT, tampoco amagó con plantear una medida de la central obrera, aunque

es claro que este reclamo afecta al conjunto de los trabajadores. El gobierno solo extendió la presunción del Covid como enfermedad laboral a los trabajadores de la salud y a las fuerzas represivas.

También está el tema de las escuelas, que son muchas y bastante frecuentes, con consecuencias crónicas que deben ser tenidas en cuenta en caso de una enfermedad profesional. Esta medida presidencial, que se muestra intransigente ante el reclamo, hay que contextualizarla también en un cuadro de recortes de gastos estatales en relación con la pandemia, cuando el gobierno achica los testeos y desarma las estructuras sanitarias montadas para enfrentar el Covid. Esto está directamente vinculado con el cierre de las cuentas públicas en los términos de ajuste fiscal que Guzmán pacta con el FMI. No se nos escapa que la patronal camionera debe estar interesada en el reclamo de Pablo Moyano, porque parte de los costos van a su bolsillo y es lo que descarga en descuentos



a los obreros, pero el reclamo es justo porque la pandemia sigue.

Moyano anunció una movilización a Plaza de Mayo, que dejó en suspenso esperando una revisión de la medida que hasta ahora no llegó. Es necesario, para doblegar al gobierno en esta disposición que afecta salarios y condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, un plan de acción de las centrales obreras, la CGT y las CTAs, que no puede estar

disociado de una lucha contra todas las medidas de ajuste programadas por el gobierno y el FMI, que la oposición de derecha apoya, como son los toques salariales, los tarifazos, la licuación de salarios mediante inflación y devaluación, y todo el paquete antiobrero fondomonetarista.

En esta, apoyamos a Camioneros, veremos si la sigue.

Emiliano Bonfiglio

Más despidos en GRI Calviño y continúa el lock-out patronal

Además de los 38 despidos, la empresa intenta eliminar premios de producción

El conflicto en la metalúrgica GRI Calviño se profundiza. El 3 de enero, a solo tres días que el gobierno levantara la prohibición de despidos, la patronal despidió con causas inventadas a 36 compañeros. Recientemente despidió a otros dos del mismo modo.

La patronal mantiene un largo lock-out que solo busca quebrar la lucha de los metalúrgicos de GRI Calviño.

El desconocimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa al no pagar los sala-

rios de los despidos, en primer lugar, pone de manifiesto que se mueve a su antojo sin ninguna intervención efectiva del Ministerio de Trabajo.

Más claro aún sobre el rol del gobierno es que mantiene la militarización de la planta con decenas de policías y patrulleros en el interior y sus alrededores.

Recientemente, los trabajadores se han movilizó al municipio de Florencio Varela para reclamar por esta situación de amedrentamiento policial sin

recibir respuestas por parte del intendente Andrés Watson, que está en línea con Kicillof y Berni contra los obreros en este conflicto gremial.

También se han movilizó a lo largo de esta lucha al Ministerio de Trabajo provincial y a la seccional de la UOM de Quilmes para reclamar un plan de acción.

Es muy clara la orientación del gobierno peronista en favor de esta multinacional que se dedica a la exportación de torres eólicas, con altos niveles de pro-

ducción y que factura millones. El gobierno de los Fernández prioriza, sin dudarlo, a los que “traen dólares” que luego se van al pago de la deuda, a costa de imponer en los hechos una reforma laboral, rebaja salarial y despidos, como sucede en GRI Calviño -es decir, el cumplimiento del pacto con el FMI.

La UOM Quilmes del “Barba” Gutiérrez juega un papel de contención e intento de desarmar la lucha. Caló de la UOM nacional firmó en diciembre la suspensión de todo el personal sin aval de los trabajadores, que ahora exigen que la UOM no firme el procedimiento preventivo de crisis trucho que presentó la empresa.

A pocos días de la elección nacional y seccional de la UOM, que será el 8 de marzo, la burocracia intenta mantener este conflicto

aislado y en la penumbra.

Los trabajadores de GRI Calviño vienen reclamando un congreso de delegados que resuelva un plan de lucha. Es necesario que se realicen asambleas en cada fábrica y dicho congreso sea con mandato de base, que vote un paro y plan de lucha de toda la seccional.

Es necesario difundir el conflicto en toda la base metalúrgica, buscar la solidaridad de los compañeros. Es urgente que el conflicto trascienda y salga de sus alrededores.

El fondo de lucha es un punto clave para que no quiebren por hambre a los compañeros, por ello el sábado 19 de febrero realizarán un festival en los alrededores de la planta.

Corresponsal

La empresa que dirige Carolina Castro, de la mesa chica de la UIA y ex candidata de Randazzo, acaba de despedir a nueve trabajadores, entre los cuales se cuentan cuatro que serían candidatos para las próximas elecciones a delegados en esta planta metalúrgica.

La complicidad de la burocracia de la UOM es ineludible. Ocurre que las elecciones a delegados fueron convocadas para septiem-

bre de 2021 y luego postergadas tras la presentación de una lista opositora al actual cuerpo de delegados de la planta y que no respondía a la burocracia de la UOM Avellaneda. Tras la postergación de la elección, que no tenía nin-

guna fundamentación legal seria, la burocracia sindical no oficializó las listas, dejando al descubierto y sin protección gremial de ningún tipo a los miembros de la lista opositora.

La maniobra de los herederos

de los viejos burócratas fallecidos Belén y Leyes, de la UOM Avellaneda, fue en completo acuerdo con la patronal, que luego culminó la tarea con los despidos de una parte de los candidatos.

Lo que ocurre en Guidi es que

la patronal impone permanentes aumentos de la producción, sin ninguna compensación económica, mantiene los salarios bajos del convenio que firmó Caló a espaldas de todos los metalúrgicos y ataca las condiciones de trabajo. Por ello no quiere una representación sindical que cuestione estos atropellos patronales.

Corresponsal

Despidos antisindicales en Guidi

La lucha ambiental presente en el Campamento de la UJS y la JPO

La pelea ambiental tendrá un lugar destacado en el Campamento de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) y la Juventud del Polo Obrero (JPO), que se va a realizar del 18 al 20 de febrero en Zárate.

El movimiento de lucha agrupado en el Atlántico y Oceanazo viene de conquistar la suspensión de la exploración sísmica offshore en las costas de Mar del Plata, luego de protagonizar movilizaciones masivas en toda la costa argentina y las principales ciudades del país. Este triunfo, si bien es parcial ya que los voceros del gobierno nacional apelaron el fallo judicial, vuelve a demostrar que luchar sirve. Como lo demostró a fin del año pasado la rebelión del pueblo de Chubut, que hizo retroceder al gobernador Mariano Arcioni y frenó la zonificación minera en la provincia.

Sin embargo, el acuerdo que cerró el gobierno de Alberto



Fernández con el Fondo Monetario Internacional va a agravar la crisis climática. Para juntar los dólares necesarios para el pago de la deuda se va a profundizar la entrega de nuestros recursos y tierras a las mineras,

petroleras, el agro y la especulación inmobiliaria.

Las prioridades del gobierno y el Ministerio de Ambiente son muy claras. En enero, con más de once provincias prendiéndose fuego, le entregaban

el Mar Argentino a la empresa noruega Equinor. Al mismo tiempo, mientras incluyeron en las sesiones extraordinarias del Congreso la ley de fomento a la agroindustria, se dejó afuera la ley de humedales que volvió a

perder estado parlamentario. Esto en un contexto donde aumentan de manera alarmante las cifras de deforestación, en particular en el norte argentino.

Por eso, el plenario que vamos a realizar el sábado en el campamento va a tomar las experiencias de la juventud que activa en el Amba, el interior de la provincia de Buenos Aires (entre ellos de Mar del Plata) y de Rosario, con el objetivo de preparar un año de grandes luchas en defensa del ambiente.

Las primeras paradas las tenemos el 22 de marzo en el Día Mundial del Agua y en el regreso a nuestros lugares de estudio, donde vamos a ir a universidades y colegios a debatir con los jóvenes que se levantan y pelean contra la depredación del ambiente, cómo nos organizamos de manera independiente al Estado para llevar esas luchas a la victoria. ¡Sumate!

Santiago Galindo

Universidad: los rectores del FMI

En una declaración del CIN respaldaron el acuerdo humillante con el Fondo

El 29 de enero de este año, “el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas de la Argentina, manifiesta su beneplácito por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” (cin.edu.ar). Por escrito, los rectores de las universidades nacionales plasmaron su apoyo al acuerdo humillante que el gobierno nacional habría alcanzado con el Fondo.

El Fondo ya llegó (o nunca se fue)

Las universidades, de la mano de los rectores, se alinean plenamente al camino del FMI. Lo hacen siendo fieles a una orientación de sumisión frente al gobierno nacional desde el minuto cero. Nada le importó al CIN la magnitud jamás antes vista de estudiantes que dejaron de cursar durante la pandemia (en algunas universidades cerca del 50%) por no haber sido asistidos con becas integrales o con computadoras y wifi para poder cursar virtualmente. Para este año 2022, el presupuesto educativo contempla un aumento del 22%

pero con una inflación que solo en enero fue del 4%. Se estima que la interanual oscilará entre un 40 y 50% (Infobae, 14/2).

Los rectores sostienen que el acuerdo con el Fondo no traerá problemas en el mundo universitario. Es muy claro que ellos ponderan, únicamente, la posibilidad de sus camarillas de desarrollar negociados y recursos propios a partir de la privatización de contenidos, el arancelamiento y el copamiento empresarial de las universidades, que tiene como contrapartida aumentar la brecha de desigualdades al interior de la universidad, utilizar estudiantes como mano de obra barata (pasantías truchas), achicar el contenido público y empalmar la ciencia con la orientación del mercado capitalista. Desde ya que el FMI en la universidad significa, también, salarios por debajo de la inflación y precarización laboral para la docencia y los no docentes.

El déficit cero que Guzmán pactó para 2025 es una orientación de conjunto que empezó hace rato. El recorte del gasto

fiscal tiene en la universidad pública un eje de ajuste ineludible. Pero, además, los jóvenes, mayoritariamente trabajadores, que cursamos en la universidad ¿cómo vamos a poder llevar adelante nuestros estudios cuando somos desempleados o precarizados? ¿Se puede cursar si la plata no alcanza para pagar el tren, subte o colectivo que nos llevan a las universidades? El CIN oculta que los tarifazos en el transporte, en la luz y el gas, sumado a la suba de alquileres, van a golpear a cientos de miles de estudiantes que tendrán que optar por vivir o cursar. Finalmente: ¿se puede cursar sin comer?

Saquemos la universidad del Fondo

Es necesario impulsar una enorme deliberación de cara al movimiento estudiantil y sacar a la universidad del Fondo, ganando las calles y desarrollando un plan de lucha. Esta tarea está plenamente en las manos de la izquierda, los sectores independientes y el activismo. La mayoría de las conducciones de los centros de estudiantes y federaciones están



alineados al FMI. Las ligadas al gobierno y a la derecha, como la FUA y Fuba moradas. De este alineamiento no escapan ni La Cámpora ni Patria Grande. Todos ellos llevan a la universidad la doctrina de Itai Hagman, “no obstaculizar el acuerdo”; el diputado cumplirá este propósito absteniéndose (por ahora) en el Congreso, sus pichones lo hacen paralizándolo al movimiento estudiantil, como ocurre en la FULP y el Cefyl.

La UJS y la JPO (Juventud del Polo Obrero) ponemos nuestra militancia al servicio de la lucha contra el Fondo y el ajuste.

Pelearnos por extender a la

universidad la experiencia de las reuniones abiertas en Parque Lezama que resolvieron, con un papel destacado del FIT-U, las únicas acciones masivas de rechazo al FMI, sumando decenas de organizaciones políticas, sociales, ecologistas y de derechos humanos, bajo un programa de acción e independencia política del gobierno y la oposición derechista.

Para preparar esta pelea a fondo te invitamos a que te sumes a nuestro campamento, esta semana de viernes a domingo. Estás a tiempo.

Santiago Sposito

Los gobiernos del capital nos llevan a la catástrofe ambiental

Sobre el nuevo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)

En agosto pasado se difundió la primera parte del nuevo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), de científicos de todo el mundo, armado por la ONU, sobre cambio climático. Para fines de febrero se espera la difusión de la segunda parte. Los informes son lapidarios en la demostración de que el aumento de la temperatura de la tierra, que en la actualidad está 1,1 grados por sobre la etapa preindustrial, es el resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Los informes sostienen que al ritmo actual, el planeta podría trepar a 1,5 grados por sobre la etapa preindustrial en 2030.

Los informes muestran que este aumento de la temperatura de la Tierra lleva a catástrofes ambientales crecientes e irreversibles. El oeste norteamericano está, en estos momentos, atravesando la peor sequía en 1.200 años. Los incendios, sequías e inundaciones van en aumento en gran parte del planeta, como vemos hoy en la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Corrientes. En el Ártico, el aumento de

la temperatura llega a 3 grados sobre la etapa preindustrial. Los cambios en la dinámica climática están conduciendo a la extinción masiva de especies, el colapso de ecosistemas y el aumento del nivel de los mares.

Aunque la situación no deja lugar a dudas, el impasse en materia de abordaje de la situación es total. En noviembre pasado, la cumbre de Glasgow (COP 26) fracasó en establecer con claridad compromisos de reducción de las emisiones. El compromiso de establecer un fondo (insuficiente) de 100.000 millones de dólares de financiamiento de los países ricos para abordar la transición a energías renovables, que se viene discutiendo desde 2009, fue nueva y previsiblemente postergado sin fecha. La guerra comercial y los choques entre potencias imperialistas colocan una barrera a cualquier cooperación internacional seria sobre el tema. La reconversión económica masiva que se requiere para abordar la crisis climática requeriría una planificación de la cual la economía capitalista, presa de los lobbies de los pulpos monopólicos,

es incapaz de abordar. La emisión de gases de efecto invernadero está fuertemente concentrada en los países imperialistas y en China.

Argentina

Este cuadro es el trasfondo en el cual hay que colocar las luchas ambientales en nuestro país. El gobierno de Fernández defiende una agenda exportadora, para el pago de la deuda externa, que choca abiertamente con cualquier objetivo de reconversión. La Argentina se ha vuelto, por un lado, un escenario de catástrofes, y por otro, un escenario de grandes confrontaciones sociales en torno del ambiente.

El año 2020 finalizó con la gran pueblada en Chubut que logró el retiro del proyecto de zonificación que permitía la megaminería. El año 2021 comenzó con el Atlántico, la gran movilización contra la exploración petrolera en el Mar Argentino, que afecta la fauna marina comprometiendo la actividad pesquera, y coloca en riesgo de derrames a las costas de la provincia de Buenos Aires.



El gobierno, sin embargo, ha ratificado su línea política. No solamente acaba de apelar la sentencia judicial que ordenó el cese de la exploración petrolera en la Costa, sino que además y en la misma semana, impulsó el abandono de 33 proyectos de energía eólica y solar porque no cuentan con las obras para transportar la electricidad generada. Con esta medida, Argentina ratifica un rumbo de dependencia de las petroleras, basada además en un esquema de explotación de carácter colonial, caracterizado por los pactos secretos entre YPF y las multinacionales, sobre el modelo de Chevron. Los funcionarios oficiales cacarean sobre autonomía energética mientras abonan esta política de entrega de recursos al imperialismo. Un gobierno concentrado en avanzar en un acuerdo con el FMI no puede dar cátedra de autonomía nacional en ningún terreno.

Argentina ya vive las consecuencias catastróficas del desarrollo capitalista sobre el ambiente. La agenda del gobierno y el pacto con el Fondo van a acentuar esta situación, promoviendo más megaminería, acentuando el monocultivo sojero, los desmontes y la expansión de la frontera agraria para el pago de la deuda. No hay ningún canje de deuda por ambiente, como "saraseó" Alberto Fernández. Lo que hay es un pago de deuda a costa del ambiente y la naturaleza. Del otro lado de la mesa de negociación, del lado del Fondo Monetario, se sientan los mismos responsables directos de la catástrofe ambiental y del fracaso de todas las cumbres internacionales en materia de reducción de emisiones. Enfrentar esta política es un gran aporte a la lucha, de alcance global, contra la catástrofe ambiental a la que nos condena el capital.

Juan García

■ PARTIDO

Exitosa campaña con más desafíos por delante

Últimas semanas de Campaña Financiera

Restan pocos días para culminar la Campaña Financiera de verano, que a estos días ya está superando los objetivos generales que nos hemos fijado. Seguramente, para la fecha de su culminación podamos superar ampliamente en varias regionales los objetivos políticos y financieros que nos propusimos, colocando en varios casos, como la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba o Rosario, un récord de aportes de simpatizantes.

La gran acción de frente único que estamos llevando adelante en la lucha contra el pacto con el FMI es el marco de esta gran campaña financiera, que tiene como principal eje su denuncia y la organización de acciones de lucha en cada frente y sector que influimos. La campaña fue atravesada por las enormes convocatorias a Plaza de Mayo de centenares de organizaciones, denunciando el plan de



ajuste que impone el gobierno en línea al reclamo del Fondo. Y nos hemos metido de lleno en la crisis política que tiene el gobierno con el cierre del acuerdo que se pretende realizar en los próximos días.

La enorme movilización del

Partido Obrero y de sus agrupaciones fueron el principal aporte a las grandes jornadas, en la misma tónica de su rol en la Campaña Financiera. En particular el Polo Obrero, que ha colaborado para superar los objetivos económicos y

políticos, acrecentando su organización en los barrios y la cantidad de compañeros que colaboraron por primera vez en la campaña. En medio del plan de lucha de la Unidad Piquetera, los compañeros fueron conscientes de la necesidad de fortalecer la acción política de nuestro partido y fueron puntales de este éxito financiero. En los frentes sindicales, con la inflación que crece cada mes y el retraso salarial que nos obliga a la lucha por la reapertura de las paritarias, la campaña tiene desafíos por delante en estas semanas, que seguramente se verán plasmadas luego de los debates en esta vuelta de las vacaciones. No es menor el impulso que dio la conquista del bono en Bridgestone, en el Neumático y en otros gremios, que ayuda a comprender el rol de las direcciones clasistas y combativas en la lucha por el salario y las reivindicaciones obreras.

Estamos a días de preparación del Congreso anual de Tribuna Docente y de los campamentos de la Juventud del Polo Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo. Acciones masivas de organización que se meten de lleno a discutir la intervención de los jóvenes y los trabajadores en la crisis actual y qué iniciativas llevamos adelante en busca de una acción independiente de la clase obrera para salir de la crisis actual y tirar abajo el pacto con el FMI.

La Campaña Financiera todavía tiene desafíos y estas tres semanas son muy importante para conquistarlos.

Aportá a la campaña, como lo han hecho miles de compañeros, que ven la necesidad de construir una acción política propia en medio de la crisis.

Emiliano Fara

UCRANIA

La Otan incrementa su despliegue militar en el este europeo

Abajo la escalada imperialista

En los últimos días se intensificaron las advertencias estadounidenses (y británicas) acerca de una inminente invasión rusa de Ucrania, a punto tal que los servicios secretos le pusieron fecha: miércoles 16 de febrero. El presidente Joe Biden resolvió trasladar la embajada en Kiev e hizo un encendido reproche a aquellos ciudadanos yanquis que no se han retirado aún del país del este europeo.

El primero en desconfiar de las versiones de los servicios de inteligencia fue el propio presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, quien volvió a pedir en forma táctica a Estados Unidos moderación en sus aseveraciones. "La verdad es que tenemos información diferente (...) todas esas suposiciones y rumores alimentan el pánico, no nos ayuda" (Euronews, 13/2).

Mientras la prensa occidental deshoja la margarita sobre la posible incursión rusa, lo que no ha cesado en ningún momento es el despliegue militar del imperialismo en la región. Biden envió 3 mil soldados suplementarios a Polonia y mil al Mar Negro (a menos de 500 kilómetros de la flota rusa en Crimea); España fletó cuatro aviones cazas a Bulgaria; y el jefe de la Otan, Jens Stoltenberg, anticipó la formación

de un grupo de combate de la alianza atlántica en Rumania, semejante a los que ya están apostados en los países bálticos y Polonia. Alemania, que debido a sus fuertes lazos comerciales con Moscú se mostraba hasta ahora reticente al envío de tropas, autorizó la partida de 350 efectivos a Lituania.

Las negociaciones

En paralelo con la machacona propaganda estadounidense sobre la invasión y con el movimiento de las tropas occidentales, que intensifican la presión sobre Moscú, hubo novedades en el tablero diplomático. Rusia anticipó que ya tiene redactada una respuesta a un texto previo que le envió la Otan, que era a su vez una réplica a las demandas originales de Moscú para llegar a un arreglo.

El primer documento ruso fijaba las "alertas rojas" del Kremlin: que Ucrania no se incorpore a la Otan y que la alianza atlántica retroceda a sus posiciones de 1997 -o sea, antes de sumar a un pelotón de Estados del este europeo que terminaron por cercar militarmente a Rusia. Washington y la Otan rechazaron de plano esos reclamos, pero dejaron la puerta abierta a una rediscusión del despliegue misilístico en Europa. Bajo el gobierno de Trump, Estados



Unidos abandonó el tratado INF y emplazó proyectiles en Polonia, a 180 kilómetros de territorio ruso.

El canciller moscovita, Serguéi Lavrov, consideró positiva la apertura de la Otan a tratar el punto. No obstante lo cual, Putin volvió a exigir garantías inmediatas de que Kiev no ingresará a la alianza atlántica. Habrá que esperar la presentación del escrito ruso para saber si las negociaciones pueden encarrilarse. Mientras tanto, Moscú anunció el retiro de algunos de los soldados que tiene desplegados en la frontera de Ucrania, en lo que fue interpretado por algunos medios como un

gesto de distensión. La salida de esas tropas es la principal demanda occidental.

Restauración capitalista

El trasfondo del conflicto actual es la expansión de la Otan y el proceso de colonización económica de los exEstados obreros por parte del imperialismo yanqui y europeo (cada cual con sus propios intereses en el terreno), que apunta a la propia Rusia como objetivo final.

En los últimos años, el tratado de asociación económica con la Unión Europea y las políticas del FMI han terminado de transformar a Ucrania

en uno de los países más pobres del continente.

El régimen de Putin no ofrece ninguna salida a las castigadas masas ucranianas y rusas, sino que defiende los intereses de la oligarquía empresaria moscovita, velozmente enriquecida a costa de los trabajadores. El gobierno ruso es responsable de la aplicación de las políticas de ajuste dentro de su país, por ejemplo, al aumentar la edad jubilatoria. A su vez, ha cerrado filas con los gobernantes de Bielorrusia y Kazajistán para reprimir las rebeliones populares en esas naciones. Por todo esto, los trabajadores rusos tienen que desarrollar una salida política propia que supere a la camarilla gobernante del Kremlin.

El retiro de las tropas de la Otan y el fin de la escalada imperialista en el este europeo es una consigna fundamental, y es particularmente importante que la tomen en sus manos los trabajadores de los países centrales. A la vez, defendemos la perspectiva de una Ucrania unida, independiente y socialista, como parte de la lucha por gobiernos de trabajadores en toda la región. Por la unidad socialista de Europa, incluyendo a Rusia.

Gustavo Montenegro

Estados Unidos: Amazon, segundo round por la organización sindical

Nueva consulta en Bessemer, Alabama

Los trabajadores del almacén de Amazon en Bessemer, Alabama, comenzaron este viernes a votar por correo (hasta el 25 de marzo) por segunda vez para definir si conforman un sindicato. La primera consulta había sido derrotada, como fruto de una brutal campaña de intimidación de la empresa.

A raíz de esa interferencia patronal, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ordenó la repetición de los comicios. Sin embargo, Amazon ha aprovechado estos meses para continuar con su propaganda antisindical, organizando inclusive a tal efecto reuniones específicas con los empleados. Además, volverá a haber un buzón para recolectar los votos dentro de la empresa, que puede

condicionar a los votantes (*Liberation News*, 10/2).

A favor de los promotores de la consulta, los mayores índices de vacunación contra el Covid-19 permitirán más contactos cara a cara, frente a una campaña previa que debió restringirse a llamados y mensajes de whatsapp.

Un punto que abre dudas respecto de los resultados es que, debido a la altísima rotación laboral en el gigante del comercio electrónico, la mitad del plantel de 6 mil trabajadores se ha renovado con respecto al momento de la consulta anterior.

A la par de Alabama, los trabajadores de los depósitos de Staten Island, en Nueva York, se preparan para su propia votación. Han

conseguido el aval necesario del 30% del plantel para forzar la consulta. Este mes podría definirse una fecha.

El proceso de organización sindical en Amazon se ha contagiado a otras grandes corporaciones, como Starbucks, donde los trabajadores de una sucursal de Buffalo, Nueva York, lograron conformar un sindicato.

La sindicalización de los trabajadores de Amazon es vital no solo debido a las infernales condiciones de trabajo (cámaras que vigilan y penalizan a los choferes; trabajadores que orinan en botellas de plástico para no perder tiempo y cumplir con los ritmos de entrega, etc.), sino a la creciente inflación que deteriora el

salario (en enero escaló a un 7,5% interanual, la cifra más alta en 40 años). En octubre pasado, una ola de conflictos por aumento de sueldos recorrió el país, en un contexto en que las patronales encuentran dificultades para sumar y retener personal (en noviembre hubo un récord de 4,5 millones de personas que renunciaron a sus puestos, disconformes con las condiciones de trabajo).

El gobierno de Joe Biden busca contener a un movimiento obrero cada vez más inquieto y ganar su adhesión para las elecciones legislativas. Por eso, apoyó la primera consulta en Amazon y anunció recientemente que se priorizarán aquellas empresas que cumplan las normas laborales a la hora de

adjudicar contratos con el Estado. La Cámara de Representantes aprobó en marzo pasado, con el voto de los demócratas, una ley (Pro Act) que extiende la cuota sindical a los no afiliados, prohíbe la interferencia de las empresas en las elecciones gremiales (como las reuniones obligatorias que se usan para hacer propaganda antisindical) y establece sanciones a firmas que violen los derechos laborales (*NPR*, 9/3/21). Esta norma está estancada en el Senado.

Pese a que lo que ha dado en concreto el gobierno demócrata a los trabajadores es poco y nada, ha sido suficiente para lograr el apoyo entusiasta de la burocracia sindical de la AFL-CIO, que se erige en un factor de control y desmoralización de sus bases.

Para llevar a buen puerto la lucha de los trabajadores de Amazon y de todo el movimiento obrero es necesaria la independencia política de los trabajadores de los capitalistas y sus partidos.

G. M.